

Bogotá D.C. abril de 2022.

Señor(a)  
**JUEZ MUNICIPAL DE JERUSALEN - CUNDINAMARCA (REPARTO)**  
**E.S.D.**

REFERENCIA: Acción de Tutela de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS Nit. 800. 149.496 – 2 en contra de MUNICIPIO DE JERUSALÉN. Nit 800.004.018-2

Respetado(a) Señor(a) Juez(a):

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS es una administradora del Régimen de Ahorro Individual con solidaridad que debe velar por los derechos de sus afiliados y tiene la posibilidad de actuar legalmente para la protección de los derechos de sus afiliados.

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS Nit. 800. 149.496 – 2, me otorgó poder con el fin de solicitar la protección de los derechos de la Administradora y sus afiliados y por tal razón acudo a su despacho para solicitar el amparo constitucional establecido en el artículo 86 de la Constitución Política en los términos del Decreto 2591 de 1991 y demás normas pertinentes, de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS y del señor DAVID FORERO CARVAJAL como afiliado de la AFP en contra el MUNICIPIO DE JERUSALÉN. Nit. 800.004.018-2 por los hechos que me permito presentar a continuación:

## **I. HECHOS**

1. El(la) señor(a) DAVID FORERO CARVAJAL quien se identificaba la con cédula de ciudadanía N°. 3.205.441, nació el día 14/02/1944.
2. El señor DAVID FORERO CARVAJAL falleció el día 2/4/2019.
3. El día 21/06/1995 DAVID FORERO CARVAJAL se trasladó al Régimen de Ahorro Individual.
4. DAVID FORERO CARVAJAL laboró con el (la) MUNICIPIO DE JERUSALÉN entre 17/01/1991 hasta el 14/06/1991.
5. El día 21 de octubre de 2019, el (la) MUNICIPIO DE JERUSALÉN expidió formato CETIL No. 201910800004018000160006.

6. El MUNICIPIO DE JERUSALÉN expidió la resolución No.007 de 2006 por medio de la cual reconoció y ordenó el pago de un bono pensional tipo A.
7. El día 12 de enero de 2022, mediante correo electrónico COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS radicó Derecho de Petición BON-13259-01-22 de fecha 12/01/2022 ante el MUNICIPIO DE JERUSALÉN, por medio del cual solicitaba la marcación de reconocimiento de bono pensional Tipo A ante la página de internet de la oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
8. El día 12/01/2022 se certificó que el derecho de petición remitido vía correo electrónico había sido entregado a las direcciones tesorgeneral@jerusalen-cundinamarca.gov.co (tesorgeneral@jerusalen-cundinamarca.gov.co)
9. El día 23 de febrero de 2022 se venció el término para dar respuesta al derecho de petición.
10. A la fecha de presentación de esta Acción de Tutela, el (la) MUNICIPIO DE JERUSALÉN no ha dado respuesta de fondo a la solicitud, es decir que no ha realizado la marcación de reconocimiento ante la página de la OBP.
11. A reclamar pensión de sobrevivientes se presentaron la señora ANA CECILIA MONTILLA DE FORERO y JAIME SABALAS.
12. COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS, no podrá reconocer ninguna prestación económica en favor de DAVID FORERO CARVAJAL, hasta que el (la) MUNICIPIO DE JERUSALÉN realice la marcación en la página de la OBP.

## **II. PRETENSIONES Y/O DECLARACIONES**

1. Amparar el Derecho Fundamental a la Seguridad Social de DAVID FORERO CARVAJAL, el cual está siendo vulnerado por el (la) MUNICIPIO DE JERUSALÉN, al no realizar la marcación de reconocimiento en la página de la OBP pues sin dicha marcación no es posible solicitar el pago del bono pensional y por tal motivo, no puede reconocerse ninguna prestación.
2. Amparar el Derecho Fundamental al Derecho de Petición de COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS, el cual está siendo vulnerado por acción y omisión por el (la) MUNICIPIO DE JERUSALÉN, en el entendido de que la efectiva protección del citado Derecho implica no solo que la entidad emita una respuesta en el término previsto, sino que la misma deba efectuarse de fondo, de manera clara, precisa y congruente con lo solicitado.

3. Amparar el Derecho Fundamental al Debido Proceso Administrativo a que tiene derecho DAVID FORERO CARVAJAL, el cual está siendo vulnerado por el(la) MUNICIPIO DE JERUSALÉN al no realizar la marcación de reconocimiento en la página de la OBP, situación que impide que COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS continúe los trámites interadministrativos necesarios para reconocer el derecho a que tiene derecho el(la) afiliado(a).
4. Amparar el Derecho Fundamental al Habeas Data a que tiene derecho DAVID FORERO CARVAJAL, el cual está siendo vulnerado por el(la) MUNICIPIO DE JERUSALÉN al no permitirle tener acceso a su información de manera clara y efectiva.
5. En consecuencia, de lo anterior, solicitó al Despacho amparar los Derechos Fundamentales invocados y como consecuencia de lo anterior ordenar a él (la) MUNICIPIO DE JERUSALÉN a responder de fondo el derecho de petición, esto es, a realizar la marcación de reconocimiento ante la Página de la OBP.

### **III. DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS**

#### **3.1. DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD SOCIAL**

El citado Derecho se encuentra regulado en el artículo 48 de la Constitución Política; en igual forma, este Derecho tiene la connotación de ser un servicio público y de tener el carácter de irrenunciable, razón por la cual se debe garantizar el goce efectivo del mismo, a todos los connacionales.

En Sentencia T-043-19 con ponencia del Magistrado Alberto Rojas Ríos, la Corte Constitucional, preciso que:

*“El artículo 48 de la Carta Política, dispone que la seguridad social es un derecho irrenunciable y un servicio público en cabeza del Estado, que debe garantizarse a todas las personas “en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”. Para esta Corporación la seguridad social es un derecho de raigambre fundamental, que debe ser definido de la siguiente manera: “conjunto de medidas institucionales tendientes a brindar progresivamente a los individuos y sus familias las garantías necesarias frente a los distintos riesgos sociales que puedan afectar su capacidad y oportunidad, en orden a generar los recursos suficientes para una subsistencia acorde con la dignidad del ser humano”*

*En Sentencia T-628 de 2007, esta Corporación estableció que la finalidad de la seguridad social guarda:*

*“necesaria correspondencia con los fines esenciales del Estado social de derecho como el servir a la comunidad; promover la prosperidad general; garantizar la efectividad de los principios y derechos constitucionales;*

*promover las condiciones para una igualdad real y efectiva; adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados; proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta; y reconocer sin discriminación alguna de la primacía de los derechos inalienables de la persona como sujeto, razón de ser y fin último del poder político, donde el gasto público social tiene prioridad sobre cualquier otra asignación.”*

La violación del Derecho Fundamental a la Seguridad Social de derecho DAVID FORERO CARVAJAL, se da por cuanto el(la) MUNICIPIO DE JERUSALÉN al no responder la solicitud elevada por COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS esto es al no realizar la marcación de reconocimiento en la página de la OBP, le impide que pueda tener acceso a la prestación del Sistema General de Pensiones solicitada por el (la) afiliado (a) ante mi poderdante.

La no solución a la respuesta por parte de la entidad accionada impide que COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS pueda continuar el trámite de bono pensional y así reconocer la prestación a que tiene derecho.

Deberá tenerse en cuenta que, COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS ha realizado los trámites necesarios para que el (la) MUNICIPIO DE JERUSALÉN resuelva de fondo la solicitud planteada.

Resulta claro que para que el afiliado DAVID FORERO CARVAJAL pueda disfrutar de la prestación a que tiene derecho, es necesario que se responda de fondo la solicitud elevada.

### **3.2. DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO EN MATERIA PENSIONAL.**

Otro de los Derechos Constitucionales que están siendo vulnerados por el (la) MUNICIPIO DE JERUSALÉN a DAVID FORERO CARVAJAL es el Debido Proceso Administrativo en materia pensional, pues según la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, es obligación de las entidades que tienen relación con los procesos que se derivan de solicitudes pensionales, tener un especial cuidado y atención, en razón a que se pueden vulnerar derechos fundamentales propios de el (la) afiliado (a).

En Sentencia T – 056 de 2017, la Corte Suprema reiteró el concepto de debido proceso administrativo en los siguientes términos:

*“Del debido proceso administrativo en materia de seguridad social.  
Reiteración*

*2.7.1. Al momento de resolver cualquier solicitud de carácter pensional, es obligación de las entidades administradoras, atender las normas y procedimientos que establece la ley. En sentencia T-040 de 2014 se precisó que: “De lo anterior, se concluye que los procesos administrativos en materia de seguridad social exigen a quienes los administran una especial atención en la resolución de solicitudes con base en información fidedigna, con base en los hechos sobre los cuales se solicita el*

*reconocimiento del derecho pensional, tales como la existencia de periodos cotizados no registrados en el expediente pensional, la inexactitud o actualización de ésta. La omisión total o parcial de esas circunstancias incide negativamente contra el debido proceso, cuyo desconocimiento puede redundar contra otros derechos, como el mínimo vital o el derecho a la seguridad social”.*

*2.7.2. Así mismo, concluye dicho precedente que en materia pensional el debido proceso está determinado por las siguientes reglas: “(i) el administrado es sujeto de protección constitucional contra los actos arbitrarios o contrarios al principio de legalidad que se producen en desconocimiento del debido proceso; (ii) el respeto de los derechos fundamentales por parte de la administración en la resolución de una petición pensional involucra una mayor diligencia y cuidado por parte de la entidad administradora; (iii) es incongruente la decisión proferida con información inexacta, máxime si el afiliado manifiesta la existencia de un error en la historia pensional, solicita su actualización y la entidad no corrige o verifica dicha situación fáctica, (iv) los efectos adversos de la mora patronal y de la falta de diligencia en el cobro por parte de la AFP, no pueden ser trasladados al afiliado, máxime cuando la omisión impide la consolidación del derecho pensional.”*

*2.7.3. Del precedente citado, fluye paladinamente que los procesos administrativos que se regulan en materia de seguridad social, exigen a quienes los realizan, una especial atención y cuidado, no solo en cuanto al manejo de la información, sino en su trámite y notificación. El cumplimiento de un debido proceso en el trámite y actuaciones administrativas reguladas en el sistema general de pensiones, garantiza la protección de derechos fundamentales como el mínimo vital y la seguridad social.”*

De la anterior cita, es claro que, el (la) MUNICIPIO DE JERUSALÉN por tener a su cargo la responsabilidad legal de expedir el bono pensional, también tiene la obligación de ingresar a la página de la OBP y registrar el proceso de reconocimiento de bono pensional.

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS ha adelantado todas las gestiones necesarias para obtener el trámite requerido, sin que haya obtenido respuesta alguna por parte de la entidad tutelada.

Por lo anterior es que el (la) MUNICIPIO DE JERUSALÉN está vulnerando el derecho fundamental de DAVID FORERO CARVAJAL y de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS.

### 3.3. DERECHO DE PETICIÓN.

Por otro lado, el(la) MUNICIPIO DE JERUSALÉN está vulnerando el derecho de petición a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS, por cuanto presentó el derecho de petición conforme lo dispone la Ley 1755 de 2015, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, referente a la protección del Derecho de Petición como Derecho Fundamental.

En Sentencia T 230 de 2020, la Corte Constitucional, estudió varios aspectos relacionados con el ejercicio del derecho de petición y los componentes esenciales del mismo para el pleno ejercicio de este Derecho Constitucional.

***“4.5.1. Caracterización del derecho de petición.*** El artículo 23 de la Constitución dispone que “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.” Esta garantía ha sido denominada derecho fundamental de petición, con el cual se promueve un canal de diálogo entre los administrados y la administración, “cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado Democrático de Derecho”. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, esta garantía tiene dos componentes esenciales: (i) la posibilidad de formular peticiones respetuosas ante las autoridades, y como correlativo a ello, (ii) la garantía de que se otorgue respuesta de fondo, eficaz, oportuna y congruente con lo solicitado. Con fundamento en ello, su núcleo esencial se circunscribe a la formulación de la petición, a la pronta resolución, a la existencia de una respuesta de fondo y a la notificación de la decisión al peticionario.

***4.5.2. Formulación de la petición.*** En virtud del derecho de petición cualquier persona podrá dirigir solicitudes respetuosas a las autoridades, ya sea verbalmente, por escrito o por cualquier otro medio idóneo (art. 23 CN y art. 13 CPACA). En otras palabras, la petición puede, por regla general, formularse ante autoridades públicas, siendo, en muchas ocasiones, una de las formas de iniciar o impulsar procedimientos administrativos. Estas últimas tienen la obligación de recibirlas, tramitarlas y responderlas de forma clara, oportuna, suficiente y congruente con lo pedido, de acuerdo con los estándares establecidos por la ley. En tratándose de autoridades judiciales, la solicitud también es procedente, siempre que el objeto del requerimiento no recaiga sobre procesos judiciales en curso.

***4.5.2.1.*** Las peticiones también podrán elevarse excepcionalmente ante organizaciones privadas. En los artículos 32 y 33 de la Ley 1437 de 2011, modificados por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015<sup>6</sup>, se estipula que cualquier persona tiene el derecho de formular solicitudes ante entidades



*de orden privado sin importar si cuentan o no con personería jurídica, cuando se trate de garantizar sus derechos fundamentales. En el ejercicio del derecho frente a privados existen iguales deberes de recibir, dar trámite y resolver de forma clara, oportuna, suficiente y congruente, siempre que sean compatibles con las funciones que ejercen. En otras palabras, los particulares, independientemente de su naturaleza jurídica, son asimilables a las autoridades públicas, para determinados efectos, entre ellos, el relacionado con el derecho de petición.*

(...)

**4.5.3. Pronta resolución.** Otro de los componentes del núcleo esencial del derecho de petición, consiste en que las solicitudes formuladas ante autoridades o particulares deben ser resueltas en el menor tiempo posible, sin que se exceda el término fijado por la ley para tal efecto.

**4.5.3.1.** El artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 dispone un término general de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud para dar respuesta, salvo que la ley hubiera determinado plazos especiales para cierto tipo de actuaciones. Esa misma disposición normativa se refiere a dos términos especiales aplicables a los requerimientos de documentos o información, y a las consultas formuladas a las autoridades relacionadas con orientación, consejo o punto de vista frente a materias a su cargo. Los primeros deberán ser resueltos en los 10 días hábiles siguientes a la recepción, mientras que los segundos dentro de los 30 días siguientes.

*De incumplirse con cualquiera de estos plazos, la autoridad podrá ser objeto de sanciones disciplinarias. Por ello, el parágrafo del precitado artículo 14 del CPACA admite la posibilidad de ampliar el término para brindar una respuesta cuando por circunstancias particulares se haga imposible resolver el asunto en los plazos legales. De encontrarse en dicho escenario, se deberá comunicar al solicitante tal situación, e indicar el tiempo razonable en el que se dará respuesta –el cual no podrá exceder el doble del inicialmente previsto por la ley–. Esta hipótesis es excepcional, esto es, solo cuando existan razones suficientes que justifiquen la imposibilidad de resolver los requerimientos en los plazos indicados en la ley.*

*Cuando se trata de peticiones relacionadas con la solicitud de documentos o de información, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011 establece un silencio administrativo positivo que opera cuando no se ha brindado respuesta dentro del término de 10 días hábiles que consagra la norma. En esos eventos, la autoridad debe proceder a la entrega de los documentos dentro de los tres días hábiles siguientes al vencimiento del plazo.*

*Como ya se anunciaba, el plazo para la respuesta de fondo se contabiliza desde el momento en que la autoridad o el particular recibieron la solicitud por cualquiera de los medios habilitados para tal efecto, siempre que estos*

*permitan la comunicación o transferencia de datos. En otras palabras, los términos para contestar empiezan a correr a partir de que el peticionario manifiesta su requerimiento, (i) ya sea verbalmente en las oficinas o medios telefónicos, (ii) por escrito –utilizando medios electrónicos que funcionen como canales de comunicación entre las dos partes, o por medio impreso en las oficinas o direcciones de la entidad pública o privada–, o (iii) también por cualquier otro medio que resulte idóneo para la transferencia de datos.*

*(...)*

**4.5.4. Respuesta de fondo.** *Otro componente del núcleo esencial supone que la contestación a los derechos de petición debe observar ciertas condiciones para que sea constitucionalmente válida. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la respuesta de la autoridad debe ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas;*

*(iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y además (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho de petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta o no procedente”.*

*(...)*

**4.5.5. Notificación de la decisión.** *Finalmente, para que el componente de respuesta de la petición se materialice, es imperativo que el solicitante conozca el contenido de la contestación realizada. Para ello, la autoridad deberá realizar la efectiva notificación de su decisión, de conformidad con los estándares contenidos en el CPACA. El deber de notificación de mantiene, incluso, cuando se trate de contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e informar sobre la remisión a la entidad encargada.*

**4.5.6.** *Agotada la anterior caracterización sobre el derecho de petición y en consideración al fondo del asunto sometido a examen de la Corte, se considera necesario puntualizar sobre las formas de canalizar o presentar las solicitudes respetuosas, las distintas manifestaciones del derecho bajo estudio y aquellas expresiones que, por regla general, no originan una obligación de respuesta.*



**4.5.6.1. Formas de canalizar las peticiones.** *El derecho de petición se puede canalizar a través de medios físicos o electrónicos de que disponga el sujeto público obligado, por regla general, de acuerdo con la preferencia del solicitante. Tales canales físicos o electrónicos pueden actuarse de forma verbal, escrita o por cualquier otra vía idónea que sirva para la comunicación o transferencia de datos.*

**4.5.6.1.1.** *Ahora bien, los medios físicos pueden definirse como aquellos soportes tangibles a partir de los cuales es posible registrar la manifestación de un hecho o acto. Dentro de los más comunes para la presentación de solicitudes se destacan la formulación presencial –ya sea verbal o por escrito– en los espacios físicos destinados por la autoridad, y el correo físico o postal para remitir el documento a la dirección destinada para tal efecto. En cualquiera de los dos eventos, al peticionario debe asignársele un radicado o algún tipo de constancia sobre la presentación de la solicitud, de manera que sea posible hacer su seguimiento.*

*Por su parte, los medios electrónicos son herramientas que permiten la producción, almacenamiento o transmisión digitalizada de documentos, datos e informaciones, a través de cualquier red de comunicación abierta o restringida. Esta última supone un diálogo entre sujetos –al menos un emisor y un receptor– en el que se da una transmisión de señales que tienen un código común. Estas herramientas tecnológicas se encuentran contenidas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), que son “el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes.” Dentro de estos servicios se resaltan los de telemática e informática en los que se ubica la Internet, hoy por hoy, medio que, por excelencia, facilita la transmisión de información y comunicaciones entre la población.*

**4.5.6.1.2.** *De acuerdo con el artículo 5 del CPACA, la formulación de peticiones podrá realizarse por cualquier medio tecnológico disponible por la entidad pública<sup>7</sup>. Y, de manera armónica con lo anterior, el artículo 7 del mismo código establece como deberes de las entidades, por una parte, adoptar medios tecnológicos para tramitar y resolver las solicitudes, y, por la otra, gestionar todas las peticiones que se alleguen vía fax o por medios electrónicos.*

(...)”

En relación con el aparte jurisprudencial anteriormente citado, es claro que el (la) MUNICIPIO DE JERUSALÉN está vulnerando el derecho Constitucional de Petición en razón a que habiéndose radicado un derecho de petición y estando vencido el término que por Ley tenía para dar contestación, esta guardó silencio.

Igualmente deberá decirse, que la respuesta que la accionada debe entregar a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS debe ser una respuesta clara expresa y de fondo, por medio de la cual se acceda a la petición solicitada, en razón a que lo que se persigue con el Derecho de Petición, es que se realice la marcación de reconocimiento ante la página de la OBP.

### **3.4. DERECHO FUNDAMENTAL AL HABEAS DATA**

Por otra parte, también se ve vulnerado el Derecho Fundamental al Habeas Data de DAVID FORERO CARVAJAL, pues es claro que no dar respuesta a la solicitud presentada por COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS, vulnera el derecho a la información clara cierta y efectiva, vulnera el derecho solicitado y descrito en los términos del artículo 15 de Constitución.

La anterior tesis, fue reiterada en jurisprudencia de la Corte Constitucional, específicamente en la Sentencia T 207 A – 18.

“Con fundamento en el artículo 15 de la Constitución Política, el *habeas data* ha sido reconocido por esta Corporación como un derecho fundamental autónomo que “[...] otorga la facultad al titular de datos personales, de exigir a las administradoras de datos personales el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización, y certificación de los datos, así como la limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los mismos, conforme a los principios que informan el proceso de administración de bases de datos personales”.

(...) Para la Corte los principios del *habeas data* implican deberes constitucionales para las entidades que custodian, conservan y administran la información contenida en archivos y bases de datos. Así, dichas entidades deben observar una obligación general de seguridad y diligencia en la administración y conservación de los datos personales y una obligación específica de corregir e indemnizar los perjuicios causados por el mal manejo de la información.

En el caso particular de la historia laboral, la Corte ha puntualizado que la información que la compone, por ejemplo, tiempo de servicio, salario devengado, cotizaciones a la seguridad social, vacaciones disfrutadas, consignación de cesantías, ascensos, licencias, entre otros, es indispensable para acceder al goce efectivo de las prestaciones sociales en cabeza del trabajador. Por lo anterior es necesario que la información laboral contenida en los archivos sea veraz, cierta, clara, precisa y completa, “a fin de que, de un lado, el trabajador pueda reclamar los derechos que le asisten, y, del otro, se protejan en su integridad los demás derechos fundamentales de los que son titulares”.

Con el fin de evitar que el (la) MUNICIPIO DE JERUSALÉN continúe vulnerando el Derecho Fundamental al Habeas Data de DAVID FORERO CARVAJAL, es necesario que realicé el trámite solicitado por COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS.

#### **IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA**

##### **4.1. EN RELACIÓN CON LA MARCACIÓN DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL BONO PENSIONAL.**

La solicitud de reconocimiento y pago de bono pensional, que se eleva a las entidades que tienen a su cargo el reconocimiento de cuotas partes pensionales y/o bonos pensionales, tiene como finalidad que la entidad encargada del reconocimiento expida la resolución y/o acto administrativo por medio del cual ordene el pago del valor equivalente a la cuota pensional.

Sin embargo, la expedición de la resolución por medio de la cual se reconoce y ordena el pago de la cuota parte pensional, tiene que ir acompañado de un proceso que se debe realizar en la página de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de hacienda y Crédito Público, para que COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS, pueda culminar el proceso redención del bono pensional.

Por lo anterior, es que se solicitó a la entidad “... *gestionar la marcación del reconocimiento y pago en la página Web <http://www.bonospensionales.gov.co/BonosPensionales> de la Oficina de Bonos Pensionales (OBP) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público*”

Se reitera que, sin la culminación de este proceso, no se podrá terminar el trámite de reconocimiento y pago del bono pensional y por tanto, no se podrá reconocer el derecho que le asiste al afiliado.

##### **4.2. CONCEPTO Y CLASES DE LOS BONOS PENSIONALES.**

La naturaleza y regulación de los bonos pensionales, se encuentra regulado en la Ley 100 de 1993, título IV disposiciones comunes a los regímenes del sistema general de pensiones, capítulo 1 Traslado Entre Regímenes - Bonos Pensionales.

El artículo 115 de la Ley 100 de 1993, define el concepto de bono pensional y determina cuales son los requisitos para la causación del derecho al reconocimiento y pago de un bono pensional.

*“ARTICULO 115. Bonos pensionales. Los bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones.*

*Tendrán derecho a bono pensional los afiliados que con anterioridad a su ingreso al régimen de ahorro individual con solidaridad cumplan alguno de los siguientes requisitos:*

##### **IV.1.A.1. Que hubiesen efectuado cotizaciones al Instituto de**

*Seguros Sociales, o a las cajas o fondos de previsión del sector público;*

**IV.1.A.2.** *Que hubiesen estado vinculados al Estado o a sus entidades descentralizadas como servidores públicos;*

**IV.1.A.3.** *Que estén vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de las pensiones;*

**IV.1.A.4.** *Que hubiesen estado afiliados a cajas previsionales del sector privado que tuvieran a su cargo exclusivo el reconocimiento y pago de pensiones.*

**PARAGRAFO.** *Los afiliados de que trata el literal a) del presente artículo que al momento del traslado hubiesen cotizado menos de 150 semanas no tendrán derecho a bono.”*

Por otro lado, el artículo 118 determina cuales son las clases de bonos pensionales y los divide en 3:

**“ARTÍCULO 118. CLASES.** *Los bonos pensionales serán de tres clases:*

*a) Bonos pensionales expedidos por la Nación;*

*b) Bonos pensionales expedidos por las Cajas, Fondos o entidades del sector público que no sean sustituidas por el Fondo de Pensiones Públicas del nivel Nacional a que se refiere el Capítulo III del presente Título, y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la Caja, Fondo o Entidad emisora,*

*c) Bonos pensionales expedidos por empresas privadas o públicas, o por cajas pensionales del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones y cuya denominación genérica de bono pensional se complementará con el nombre de la entidad emisora.”*

#### **4.3. DE LA IMPORTANCIA DEL BONO PENSIONAL. JURISPRUDENCIA.**

En Sentencia T – 471 de 2017, la Corte Constitucional, determinó la importancia del bono pensional y se refirió a este en los siguientes términos:

*“La trascendencia ius fundamental del bono pensional*

*La definición de las prestaciones en materia pensional puede implicar el cómputo de semanas y recursos aportados con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. Por tal razón, la consolidación de las fuentes de financiamiento para las prestaciones reclamadas por los usuarios exige el traslado de recursos financieros hacia las entidades encargadas de su*

reconocimiento y pago.

*Una de las formas de movilidad de recursos para el financiamiento de los beneficios pensionales pretendidos por los afiliados es el bono pensional. **Esta Corporación ha considerado que los bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para el financiamiento de las pensiones de los usuarios del sistema.***

*Conforme a lo expuesto, para la Corte los bonos pensionales son documentos crediticios que representan en dinero el tiempo de afiliación o de servicios de una persona, el cual se materializa cuando el individuo ha cumplido con los requisitos exigidos por la legislación para obtener su pensión de vejez [124].*

*Conforme al artículo 1º del Decreto 1748 de 1995[125], los bonos pensionales pueden ser de tipo A o de tipo B [126]. Los bonos de tipo A son aquellos que se expiden a personas que se trasladan al régimen de ahorro individual con solidaridad. Por su parte, los bonos tipo B son los regulados por el Decreto 1314 de 1994 y se expiden a servidores públicos que se trasladen al ISS después de la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones.*

*De esta manera, el artículo 2º del Decreto 1314 de 1994[127] establece los requisitos para la emisión del bono pensional cuando el traslado que lo origina corresponde a quienes presten o hubiesen prestado servicios al Estado o a alguna de sus entidades descentralizadas como servidores públicos de cualquier orden con vinculación contractual, legal o reglamentaria.*

*Adicionalmente, prescribe que los bonos pensionales deberán ser emitidos dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de traslado del afiliado al régimen de prima media.*

*El artículo 4º del decreto en cita, consagra que estos bonos pensionales deben ser emitidos por la última entidad pagadora a la cual haya pertenecido el afiliado o por la Nación o la entidad territorial. El artículo 7º regula lo relacionado con su redención cuando el usuario se pensione en el Instituto de Seguros Sociales por vejez, invalidez o cuando se cause la pensión de supervivencia y cuando haya lugar a la indemnización sustitutiva.*

*El artículo 5º del Decreto 1748 de 1.995, adicionado por el artículo 2º del Decreto 1513 de 1998, que regula la emisión de bonos pensionales, define la expedición como: "(...) el momento de suscripción del título físico o el ingreso de la información al depósito central de valores"; de otra parte la emisión implica: "(...) el momento en que se confirma o certifica la información contenida en la liquidación provisional, en el caso de emisores*

*privados, o el momento en que queda en firme el acto administrativo que reconoce el derecho al bono pensional, en el caso de emisores públicos.”*

*(...)*

***“Ahora bien, la Corte en la sentencia T-1044 de 2001 expresó que el trámite del bono pensional es el paso previo al reconocimiento de la pensión, por lo que su emisión debe ser pronta y oportuna y además, exige a las entidades que concurren a la satisfacción de la prestación (administradora y emisora) que actúen de manera conjunta y concertada dentro de los principios de eficacia y celeridad, puesto que la demora injustificada en su gestión afecta de manera directa el derecho pensional del afiliado y repercute en garantías ius fundamentales como el mínimo vital.”***

*(...)*

***“En conclusión, el bono pensional constituye un valioso instrumento para el financiamiento de las pensiones o de la indemnización sustitutiva mediante la movilidad de recursos económicos comprometidos con el reconocimiento de los derechos pensionales de los usuarios. Tienen una innegable trascendencia ius fundamental, pues su emisión resulta determinante para el reconocimiento del derecho a la pensión y en consecuencia permite garantizar el derecho fundamental al mínimo vital. En su trámite intervienen tanto las entidades emisoras como la administradora del fondo de pensiones, mediante el ejercicio de actuaciones administrativas conjuntas y coordinadas.”***

*Negrilla y subraya fuera del texto*

De conformidad con el aparte jurisprudencial anteriormente citado, es claro que el bono pensional es trascendental y necesario para el reconocimiento de las prestaciones económicas derivadas del Sistema General de Pensiones, máxime cuando estamos en el escenario de un (a) afiliado (a) de una Administradora de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual como lo es COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS, pues solamente hasta determinar el valor equivalente del bono pensional y sumarlo a la cuenta de ahorro individual, se podrá determinar si el (la) afiliado (a) cumplen con el capital necesario para financiar una pensión de vejez.

Igualmente, el bono pensional resulta fundamental, en prestaciones derivadas de la invalidez o la sobrevivencia, en razón a que se requiere determinar con plena claridad el valor del bono



pensional y de la cuenta de ahorro individual, con el fin de poder realizar el cobro de la suma adicional, derivada de la póliza previsional.

#### **4.4. PRONUNCIAMIENTO JURISPRUDENCIAL DE LAS ETAPAS DE LOS BONOS PENSIONALES.**

Son múltiples los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia que, en sede de Tutela, realizan un estudio de la figura del bono pensional. Así fue en el caso de la Sentencia T 056 de 2017, en la cual la Corte manifestó:

*“Procedimiento para la liquidación, expedición, emisión y redención de bonos pensionales.*

**Los bonos pensionales constituyen aportes destinados a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema[14]. Doctrinalmente han sido definidos como “un valor a favor de un afiliado que se traslada a uno de los regímenes del Sistema General de Pensiones, el cual representa la deuda pensional causada desde el momento en que el afiliado inició su vida laboral hasta la fecha efectiva del traslado, en razón de las vinculaciones laborales, legales o reglamentarias que tuvo con las diferentes entidades de previsión que asumen el pago de la obligación”.**[15]

Los bonos pensionales se pueden clasificar en: 1) de acuerdo con su emisor[16], 2) dependiendo del régimen al cual se traslada el afiliado: bono tipo A, es el bono que le corresponde a quien se traslada del régimen de pensiones de prestación definida al régimen de ahorro individual. El bono tipo B es cuando el traslado ocurre del régimen de ahorro individual al régimen con prestación definida[17] y 3) los bonos especiales tipo E[18] y C[19].

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el caso objeto de estudio la agenciada se trasladó del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, la Sala estudiará los bonos pensionales tipo A, que a su vez, presentan dos modalidades: Modalidad 1, que corresponde a los bonos que se expiden a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició después del 30 de junio de 1992, y la Modalidad 2, que se refiere a los bonos que se expiden a favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral válida se inició antes del 1º de julio de 1992. Los bonos pensionales tipo A, serán expedidos por la última entidad pagadora de pensiones a la cual haya pertenecido el afiliado antes de la selección o traslado al régimen de ahorro individual, siempre y cuando el tiempo de cotización o de servicios, continuo o discontinuo, haya sido igual o mayor a 5 años. Cuando el tiempo en la última entidad pagadora de pensiones sea inferior a 5 años, el bono pensional será expedido por la

*entidad pagadora de pensiones en la cual el afiliado haya efectuado el mayor número de aportes o haya cumplido el mayor tiempo de servicios.[20]*

*Por otra parte, el procedimiento para la liquidación, emisión y expedición de los bonos pensionales tipo A presupone el agotamiento de las siguientes etapas: (i) conformación de la historia laboral del afiliado; (ii) solicitud y realización de la liquidación provisional; (iii) aceptación por parte del afiliado de la liquidación provisional; (iv) emisión; (v) expedición; (vi) redención y (vii) pago del bono pensional. A continuación, se describirán brevemente cada una ellas: Una vez el beneficiario del bono realiza la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Decreto 1513 de 1998, el primer paso para la tramitación del bono pensional es la conformación de la historia laboral del afiliado, que se realiza mediante la información que éste suministra a su AFP y la información que la AFP solicita a las entidades a las cuales el trabajador realizó cotizaciones diferentes al ISS. La información así obtenida es ingresada por la AFP al Sistema Interactivo que para el efecto tiene la OBP[21]. La información sobre cotizaciones realizadas por el trabajador al ISS se obtiene del archivo masivo que para el efecto tiene el ISS. Si se presenta alguna variación posterior de esta información y así lo certifica el ISS, la AFP debe digitar esta nueva información en el Sistema Interactivo de la OBP.*

*(i) Conformada la historia laboral, la Administradora de Fondos de Pensiones, en representación del afiliado, debe solicitar al emisor del bono pensional la liquidación de éste, para lo cual debe definir el salario base para el cálculo del bono pensional.*

*(ii) Con esta información, la OBP realiza un cálculo del valor del bono a la fecha de corte, que denomina liquidación provisional. Antes de la emisión del bono pensional se pueden producir diversas liquidaciones provisionales, dependiendo de la información y de la aceptación de la misma por parte del afiliado. Según lo dispone el inciso 9º del artículo 52 del Decreto 1748 de 1995, la liquidación provisional no constituye una situación jurídica consolidada.*

*(iii) Realizada la liquidación provisional, la AFP debe dar a conocer la liquidación provisional al afiliado para que éste la apruebe y la firme de conformidad con lo estipulado en el artículo 7º del Decreto 3798 de 2003. Si no está de acuerdo debe explicar a la AFP sus razones para que se efectúen las correcciones a que haya lugar. Efectuados los ajustes debe realizarse una nueva solicitud a la OBP de liquidación provisional.*

*(iv) Producida la aprobación de la liquidación provisional por parte del afiliado, la AFP debe requerir a la OBP la emisión del bono pensional, la cual se realiza mediante resolución por parte del emisor, en la que se consagran los datos básicos del bono pensional y los valores calculados a esa fecha, los cuales pueden variar.*

*(v) La expedición del bono pensional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 1513 de 1998, es el momento en que se suscribe el título físico o del ingreso de la información a un depósito central de valores, en el caso de la expedición desmaterializada de títulos. Un bono emitido se expide en uno de los siguientes tres casos: (1) por redención normal del bono pensional tipo A que se produce cuando el afiliado, cumple 62 años, si es hombre, o 60 años, si es mujer, o cuando el mismo completa mil semanas de vinculación laboral válida para el bono; (2) por redención anticipada del bono pensional tipo A que ocurre cuando el afiliado fallece, es declarado inválido, o no cumple con el requisito de las semanas exigidas para obtener la garantía de la pensión mínima ni cuenta con el capital suficiente para adquirir una pensión; y (3) por solicitud de la AFP, una vez ésta ha obtenido autorización escrita del afiliado para negociar el bono con el fin de obtener una pensión anticipada.*

*(vi) Por último, se produce el pago del bono pensional a la AFP, que consiste en el depósito de los dineros en la cuenta de ahorro individual del beneficiario.”*

#### **4.5. DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LAS ADMINISTRADORAS DE PENSIONES EN FAVOR DE SUS AFILIADOS.**

Por disposición legal, las Administradoras de Fondo de Pensiones, están obligadas a realizar de manera gratuita, varios trámites interadministrativos, con el fin de obtener la información necesaria para garantizar los derechos de sus afiliados.

Es así que, por ejemplo, tratándose se bonos pensionales, las Administradoras deben solicitar certificaciones de tiempos laborados ante las entidades donde el (la) afiliado (a) prestó sus servicios con anterioridad a la fecha de afiliación al Régimen de Ahorro Individual, reconstruir la historia laboral del mismo de conformidad con los tiempos que el (la) afiliado informe y solicitar el reconocimiento, emisión y pago del bono pensional.

Lo anterior, de conformidad con el Decreto 665 de 1994, por medio del cual se establece el Régimen Jurídico y financiero de las sociedades que administren fondos pensionales.

El artículo 20 del Decreto 665 de 1994, Reglamentado parcialmente por el Decreto 13 de 2001, dispone en relación con los bonos pensionales que:

*“Artículo 20º.- Reglamentado parcialmente Decreto Nacional 13 de 2001  
Corresponde a las sociedades que administren fondos de pensiones adelantar, por cuenta del afiliado pero sin ningún costo para éste, las acciones y procesos de solicitud de emisión de bonos pensionales y de pago de los mismos cuando se cumplan los requisitos establecidos para su exigibilidad.*

*Las solicitudes de emisión de bonos pensionales deberán ser presentadas a la entidad previsional correspondiente dentro de los seis (6) meses inmediatamente siguientes a la vinculación del afiliado que tenga derecho a dicho beneficio, y hasta tanto sean emitidos efectivamente deberán efectuar un seguimiento trimestral al trámite de su*

*emisión. Para estos efectos, los afiliados deberán suministrar a las administradoras la información que sea necesaria para tramitar las solicitudes y que se encuentre a su alcance. En todo caso, las administradoras estarán facultadas para solicitar las certificaciones que resulten necesarias, las cuales serán de obligatoria expedición por parte de los destinatarios.*

*Las solicitudes de pago de bonos pensionales deberán ser presentadas por la administradora a la cual se haya formulado una solicitud de reconocimiento de una pensión de invalidez, sobrevivencia o vejez por personas que hayan cumplido la edad establecida para obtener la garantía de pensión mínima del Estado. Tratándose de personas que se hayan pensionado por vejez con anterioridad a dicha edad y se hayan acogido a la modalidad de retiro programado, la solicitud de pago del bono pensional será presentada por la administradora que se encuentre pagando la pensión al momento de cumplirse todos los requisitos señalados para la redención del título.*

*La solicitud de pago de un bono para atender una pensión de invalidez, sobrevivencia o vejez por cumplimiento de la edad para acceder a una pensión mínima deberá ser presentada dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la decisión de la administradora acerca del cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos para acceder a la pensión. Tratándose de personas que hayan obtenido una pensión de vejez con anterioridad a dicha edad, la solicitud de pago del bono deberá presentarse por la entidad que tenga a su cargo el pago de la pensión al momento en que el pensionado cumpla esa edad.*

*En todo caso, el seguimiento del proceso de pago efectivo de los bonos pensionales se adelantará por las entidades que tengan a su cargo el pago de la respectiva pensión.”*

Es por lo anterior, que no solo COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS estuvo legitimado para haber presentado el derecho de petición en nombre de el (la) afiliado (a) por medio del cual solicitó a la accionada el reconocimiento y emisión del bono pensional, sino que también está legitimada para interponer la presente acción de tutela, pues el único fin que se persigue con la misma, es que la accionada resuelva de fondo y de manera clara la petición, es decir, que reconozca y emita el bono pensional.

#### **4.6. DE LA POSIBLE CAUSACIÓN DE UN PERJUICIO PARA LOS AFILIADOS DE COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS.**

La omisión de la respuesta por parte de la accionada, frente a la solicitud de reconocimiento y emisión del bono pensional, puede llegar a afectar de manera directa o indirecta algunos derechos fundamentales de los afiliados de Colfondos Pensiones y Cesantías.

Como ya se ha manifestado en reiteradas oportunidades, el trámite correspondiente al bono pensional resulta indispensable para que los afiliados que tienen derecho al mismo, puedan ejercer de manera eficiente su derecho a la Seguridad Social, pues como lo expresó la Corte

Constitucional, el bono pensional constituye un aporte económico cuyo fin es financiar las prestaciones económicas del Sistema General de Pensiones, frente a los 3 riesgos principales, vejez, invalidez y sobrevivencia.

Que la accionada no resuelva de fondo y de manera eficiente la solicitud elevada por Colfondos Pensiones y Cesantías, impide que esta última pueda resolver las solicitudes que han sido elevadas por sus afiliados, generando que se exista la posibilidad, de menoscabar derechos del afiliado, tales como la vida digna, el mínimo vital y móvil, la salud en conexidad con la vida, entre otros, pues aunque resulte evidente, deberá decirse que el afiliado tiene acceso a una prestación, cuando está en estado de indefensión, bien sea porque está por cerrar su etapa laboral por que ha mermado su capacidad de trabajo y solicita acceder a una prestación por vejez o cuando el afiliado perdió su capacidad laboral y está en estado de invalidez o cuando se está en estado de indefensión por el fallecimiento de un afiliado al sistema.

La anterior manifestación, tiene respaldo jurídico entre otras, en la Sentencia T 445 A de 2015, proferida por la Corte Constitucional, a saber:

*“2.1.13. La conclusión a la que se llega es que resulta procedente la acción de tutela frente a las controversias o trámites que resultan fundamentales para el reconocimiento de prestaciones definitivas como la pensión de vejez, la devolución de saldos, o la indemnización sustitutiva, que en consecuencia, vulneran derechos fundamentales en conexidad con el mínimo vital, petición, debido proceso y seguridad social, siempre que del análisis del caso en concreto se demuestren circunstancias especiales respecto de la persona que reclama el amparo, ya sea por su condición económica, física, mental, o porque se trata de un sujeto de especial protección.”*

Es así como, de no prosperar la Acción de Tutela, se pondrían en riesgo inminente los derechos de el (la) afiliado (a) de Colfondos.

#### **4.7. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA SOLICITAR TRÁMITES RELACIONADOS CON BONOSPENSIONALES.**

Si bien el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, dispone que cualquier controversia que se suscite en relación con temas derivados de la seguridad social, deben ser competencia del Juez Laboral, la Corte Constitucional ha manifestado en que ocasiones la Acción de Tutela resulta procedente en temas relacionados con los bonos pensionales.

En Sentencia T 445 A de 2015, la Corte Constitucional, en relación con la procedencia de la Acción de Tutela, se manifestó en los siguientes términos:

*2.1.12. De igual manera, esta Corte en precedente en el que se discutía la múltiple vinculación de un afiliado al sistema, dirimió la controversia, con el fin de proteger el derecho de petición y seguridad social, y así reconocer la devolución de saldos.<sup>5</sup> No obstante, en otras oportunidades, la Corte ha dicho que cuando la mora en la emisión del bono pensional*



*se constituye en obstáculo para el reconocimiento de la pensión de vejez, procede excepcionalmente la acción de tutela para la protección del derecho a la seguridad social en conexidad con el derecho al mínimo vital y a la dignidad humana.*

Por otro lado, en Sentencia 660 de 2007, en relación con la procedencia de la Acción de Tutela para solicitar la emisión del bono pensional, manifestó que:

*Procedencia excepcional de la acción de tutela para liquidación y emisión del bono pensional.*

*La jurisprudencia tiene establecido que la acción de tutela sólo procede para discutir la liquidación y emisión del bono pensional cuando éste constituye el elemento fundamental para que se consolide el derecho a la pensión de vejez o de jubilación. En otras palabras, cuando el reconocimiento de la pensión depende de la expedición del bono pensional y ésta prestación constituye el medio para preservar el mínimo vital de los aspirantes a ser pensionados, el juez de tutela puede ordenar la emisión del título valor[6] o el cumplimiento de los distintos trámites pertinentes para impulsar su liquidación y emisión[7].*

*En este sentido, la Corte Constitucional ha dicho que en aquellos casos en los que la liquidación y emisión de los bonos constituye un fundamento para la consolidación y reconocimiento de la pensión de jubilación o de vejez, la acción de tutela procede de manera excepcional para proteger los derechos como la vida, el mínimo vital o la seguridad social de quien no obstante ha cumplido con los requisitos de ley para lograr su reconocimiento, queda sometido a una prolongada e indefinida espera, con ocasión del trámite en la expedición del bono pensional.[8]*

*Así, en varias oportunidades, se ha concedido la acción de tutela para ordenar la liquidación y emisión del bono pensional con base en los siguientes criterios que fueron resumidos en las Sentencias T-671 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-1103 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-1119 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño y, T-1124 de 2001, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, de la siguiente manera:*

*“La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido de manera reiterada los siguientes criterios para el reconocimiento y pago de pensiones mediante acción de tutela en los casos en que media la exigencia de un bono pensional. (i) La omisión o retardo en la expedición del bono pensional vulnera derechos fundamentales tales como el derecho a la seguridad social y al mínimo vital, cuando se trata de personas de la tercera edad cuyo sustento depende del reconocimiento y pago de la pensión de vejez o de jubilación. (ii) Los trámites administrativos que dilaten de manera injustificada la decisión de fondo sobre el derecho a la pensión de jubilación, constituyen una vía de hecho que puede dar lugar*



*a sanciones disciplinarias de los funcionarios involucrados. Por último (iii)*

*la tutela no debe ser el mecanismo para obtener la expedición o pago del bono pensional cuando se la utiliza para pretermir el trámite administrativo correspondiente o cuando se solicita la tutela del derecho de petición, sin que el accionante hubiera presentado una solicitud expresa a la entidad encargada de emitir el bono.”*

*..También la Corte ha sostenido que la tramitación del bono pensional que constituye parte fundamental en el reconocimiento de la pensión, debe tramitarse por parte de todos los que intervienen – administradoras, emisor y contribuyente – dentro de los principios de eficacia y celeridad.*

De acuerdo con el aparte jurisprudencial citado, es claro que el bono pensional como ya se ha manifestado, es parte determinante y esencial para conocer el derecho que le asiste al afiliado, pues solamente hasta que se tenga el valor de este, tras su emisión, es que se puede determinar el capital total con que cuenta el (la) afiliado (a) y definir la prestación que le corresponde.

También deberá decirse que, iniciar un proceso ordinario laboral con el fin de que la entidad reconozca la obligación de emitir un bono pensional, no solo resulta desgastante y poco eficaz, sino que ese escenario también podría vulnerar los derechos fundamentales de el (la) afiliado (a), por tener que someterse al término de duración del litigio.

En suma, deberá decirse que la Acción de Tutela resulta procedente y no solo como el mecanismo que obligue a la accionada a dar respuesta a la solicitud, sino que es también, el mecanismo adecuado para exigir a la accionada que reconozca y emita el bono pensional, para que así se garanticen los derechos no solo de Colfondos sino también de el (la) afiliado (a)

## **V. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA**

En concordancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional es necesario que se cumplan ciertos requisitos para que la acción de tutela sea procedente. Claramente ante la situación descrita, se cumplen los mismos así:

- 5.1. Cuando no exista otro medio judicial de protección, o aun existiendo este medio judicial, se debe analizar si el mismo es idóneo, si no lo es para la protección constitucional de los derechos fundamentales vulnerados es necesario concederla.
- 5.2. La acción de tutela sea el medio para evitar un perjuicio irremediable a los derechos vulnerados, como son el de petición, debido proceso administrativo, seguridad social de Colfondos Pensiones y Cesantías y posiblemente el derecho a la vida, el mínimo vital y móvil, de el (la) afiliado (a).

- 5.3. Tal como lo manifestó la Honorable Corte Constitucional en Sentencia T 653 de 2009 la controversia “transcienda del ámbito de un conflicto del orden legal y tengarelación directa con el contenido normativo superior.

En este orden de ideas los hechos expuestos en este escrito se ajustan a lo exigido en el requisito 1,2 y 3 para que la tutela sea procedente, puesto que, a pesar de haber otros mediosjudiciales, estos no son idóneos para la protección de los derechos fundamentales vulneradosen el caso de la referencia.

## VI. COMPETENCIA

De conformidad con el Decreto 2591 de 1991 y la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, su despacho es competente para resolver esta acción de tutela, toda vez que la vulneración o amenaza que motivan esta acción de tutela se configura respecto de solicitudes radicadas por COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTIAS a una entidad cuyo domicilio pertenece a esta jurisdicción.

***“ARTICULO 37. PRIMERA INSTANCIA.** Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.*

*El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las consecuencias penales del falso testimonio.*

*<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes los jueces de circuito del lugar.”*

En relación con el factor competición la Corte Constitucional en Sentencia T 131 de 2018, manifestó:

*“3. De otro lado, esta Corporación también ha insistido en señalar que la competencia por el factor territorial no puede determinarse acudiendo, sin más, al lugar de residencia de la parte accionante, o al lugar donde tenga su sede el ente que, presuntamente, viola los derechos fundamentales. En otra dirección, la competencia por el factor territorial corresponde al juez del lugar donde se presentó u ocurrió la vulneración que se busca proteger o del lugar donde se producen los efectos de tal vulneración, el cual*

**puede o no coincidir con el domicilio de las partes.”**

Negrilla y subraya fuera del texto

Es por lo anterior, que su despacho resulta ser competente para resolver la presente Acción de Tutela.

## **VII. JURAMENTO**

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, manifiesto bajo la gravedad del juramento que no he presentado acción de tutela por los mismos hechos que son fundamento de esta acción.

## **VIII. PRUEBAS**

1. Copia del documento de DAVID FORERO CARVAJAL.
2. Copia de certificado SIAFP donde se puede verificar el historial de afiliación de DAVID FORERO CARVAJAL al Régimen de Ahorro Individual.
3. Copia de certificado CETIL.
4. Copia de historia laboral de la OBP.
5. Copia de derecho de petición remitido por COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS a él (la) MUNICIPIO DE JERUSALÉN.
6. Copia de correo electrónico por medio del cual se remitió el derecho de petición a la entidad.
7. Copia del comprobante de recibido del correo electrónico por medio del cual se remitió el derecho de petición.
8. Copia de la solicitud de pensión de sobrevivientes y sus anexos.
13. Copia de la resolución por medio de la cual reconoció y ordenó el pago de un bono pensional tipo A
9. Copia del certificado de existencia y representación legal de mi poderdante.
10. Copia de poder otorgado por mi poderdante.
11. Copia de mi cédula y tarjeta profesional.

## **IX. NOTIFICACIONES**

Recibiré notificaciones en la Calle 73 No. 9 – 42 oficina 408 en la ciudad de Bogotá D.C. o al correo electrónico: [procesosjudiciales@canonydiazabogados.com](mailto:procesosjudiciales@canonydiazabogados.com) Tel. 318 2695888

La accionada recibirá notificaciones Calle 2 # 4-72 Jerusalén.  
[notificacionesjudiciales@jerusalen-cundinamarca.gov.co](mailto:notificacionesjudiciales@jerusalen-cundinamarca.gov.co).

Atentamente.



**CARLOS ANDRÉS CAÑÓN DORADO**  
C.C. 79.788.842 de Bogotá D.C.  
T.P. 113.666 del C.S de la J.